

## PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 1812/19



H103064348753

### JUICIO: CASTRO CLAUDIA PATRICIA Y OTRO c/ AGROTEK S.R.L. Y REFINERIA DEL NORTE S.A. s/ COBRO DE PESOS. EXPTE. N° 1812/19

San Miguel de Tucumán, 10 de abril de 2023.

**AUTOS Y VISTOS:** Para dictar sentencia definitiva en la causa del título "CASTRO CLAUDIA PATRICIA Y OTRO c/ AGROTEK S.R.L. Y REFINERIA DEL NORTE S.A. s/ COBRO DE PESOS" que tramitó ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, de cuyo estudio

#### RESULTA:

Por escrito del 23/12/16 se apersonó Enrique Martín Cacici en representación de los sres. CLAUDIA PATRICIA CASTRO, DNI N° 24.200.010, domiciliada en av. Martín Berho 917 de esta ciudad y JUAN CARLOS NÚÑEZ, DNI N° 21.597.495, con domicilio en Gregorio de Jesús Díaz n° 30, Barrio Cruz Alta, Colombres, Cruz Alta, Tucumán y demás constancias personales que obran en poder *ad litem*.

En tal carácter interpuso demanda en contra de AGROTEK SERVICIOS SRL (en adelante Agrotek), CUIT 30-71138101-1, ubicado en av. Aconquija 2553 Yerba Buena y, de manera solidaria, en contra de REFINERÍA DEL NORTE SA (de ahora en más Refinería), CUIT 30-65823369-2, ubicada en av. Mitre 858 de esta ciudad por las sumas de \$887.147,18 y \$876.771,53, respectivamente, en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, Sac/integración mes de despido, Sac proporcional, Sac/preaviso, vacaciones de 2018, mes de marzo de 2018, días de abril de 2018, arts. 2 de la Ley n° 25323 y 80 de la LCT.

Describió que el 02/05/2000 los demandantes comenzaron a desempeñarse para Agrotek -sociedad que brinda servicios de limpieza y mantenimiento- como "Maestranza A", según CCT n° 130/75, desarrollando tareas de limpieza en las instalaciones de la estación de servicios conocida como "Refinor", de av. Mitre 858. Refirió que trabajaron de lunes a viernes de 6 a 15 h y los sábados de 7 a 10 y que debieron percibir \$24.448,60 (marzo de 2018) suma que a su vez emplearon como base de su planilla de rubros.

Alegó que el 26/03/18 les impidieron el ingreso a su lugar habitual de trabajo, por lo que iniciaron el intercambio epistolar que culminó con su despido indirecto el 25/04/2018.

Reclamó la participación solidaria de Refinería por cuanto fue el lugar de prestación de tareas durante la vinculación con la demandada, elaborando un análisis al que me remito en honor a la brevedad.

Solicitó se aplique a ambas empresas lo dispuesto por el art. 275 de la LCT ya que intentaron desligarse de responsabilidad.

Finalmente practicó planilla de rubros.

Por escrito de f. 153 aportó la documentación que se detalló el 18/02/20.

El decreto del 19/02/21 proveyó el apersonamiento del letrado César Marcelo Cisneros en representación de los actores.

Por pronunciamiento del 07/09/21 se tuvo por incontestada la demanda de AGROTEK SERVICIOS SRL.

En fecha 04/10/21 se presentó el Dr. Pablo Bulacio Paz como apoderado de REFINERÍA DEL NORTE SA, con domicilio en avenida Perón 2300, Torre 1, piso 2, oficina 1, Complejo Altercity, Yerba Buena, Tucumán.

En primer lugar, dedujo falta de legitimación pasiva pues su mandante no empleó a los actores.

Luego de efectuar la negativa genérica de los hechos invocados por la contraria, proporcionó su versión.

Rechazó la solidaridad en los términos del art. 29 de la LCT pues su parte no es una empresa de servicios eventuales ni intentó utilizar una interpósita persona para evadir sus responsabilidades. Opinó que una empresa puede encomendar a otra la realización de algunas tareas que no hagan a su especialización o actividad propia y específica.

En último lugar, impugnó planilla.

Mediante decreto del 19/11/21 se dispuso la apertura de la causa a pruebas.

El 28/03/22 se celebró la audiencia de conciliación, a la que asistieron los mandantes de los actores y de Refinería. Surge de su contenido que se tuvo por intentado el acto conciliatorio y que se suspendieron los plazos hasta el 18/04/22 en que se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes.

Concluida la etapa probatoria, el 18/11/22 Secretaría actuaria informó a tenor del art. 101 del CPL: Parte actora: 1) Instrumental: producida. 2) Testimonial: parcialmente producida e incidente de tachas de testigos. 3) Informativa: producida. 4) Pericial contable: sin producir. 5) Confesional: rechazada. Parte codemandada Refinería: 1) Instrumental: producida. 2) Confesional: producida. 3) Pericial contable (acumulada al cuaderno de prueba del actor nº 4) sin producir. 4) Testimonial: parcialmente producida e incidente de tachas de testigos. Por disposición de igual fecha se informó a las partes que la causa estaba a su disposición para alegar.

En nota del 20/12/22 se asentó que la parte actora y Refinería presentaron alegatos y a través de disposición del 21/12/2022 se dispuso el pase de los autos a despacho para el dictado de sentencia definitiva.

#### **CONSIDERANDO:**

I. Debido a que la accionada incurrió en incontestación de demanda es aplicable el art. 58 CPL -que prevé la presunción de certeza de los hechos invocados y de autenticidad y recepción de los documentos acompañados con la demanda, salvo prueba en contrario-, conjetura en contra del empleador que cobra operatividad relativa a partir de la acreditación del hecho principal, esto es, la prestación de servicios laborales.

Este es el criterio seguido por el Máximo Tribunal Provincial, por cuanto consideró que su conducta omisiva y silente no exime al reclamante, en modo alguno, de la carga probatoria relativa al hecho principal (sentencia nº 1020 del 30/10/2006 Díaz Carlos Gustavo vs. Refinería de Maíz SAIF s/ Despido; sentencia nº 58 del 20/02/08 López Miguel Alejandro vs. Pintos Ramón Lino s/Despido; sentencia nº 793

del 22/08/2008 Salcedo Reneé César vs. Azucarera La Trinidad S.A. s/ Acción de reagravación y otros).

II. En consecuencia, las cuestiones controvertidas sobre las que deberé pronunciarme, de conformidad a lo previsto en el art. 214 inc. 6 del CPCC supletorio al fuero, son las siguientes: 1) Empleador y responsabilidad solidaria. 2) Extremos de la relación laboral: fecha de ingreso; tareas, categoría profesional; jornada y remuneración. 3) Despido y su justificación. 4) Procedencia de los rubros y montos reclamados. 5) Intereses, costas, honorarios.

**PRIMERA CUESTIÓN: Empleador y responsabilidad solidaria.**

1. Corresponde recalcar que de las piezas postales aportadas y del escrito de interposición de demanda surgen imprecisiones y ambigüedades sobre este particular, conforme señalaré a continuación.

A través de TCLs del 10/04/18 y 24/04/2018 los sres. Castro y Núñez expresaron “...**Conforme a la ley de contrato de trabajo ustedes (Refinería del Norte SA) son considerados mis empleadores directos**, ya que utilizan mis servicios...**siendo por lo tanto responsables en forma solidaria e ilimitada** de todas las obligaciones emergentes y del régimen de la seguridad social, junto a mi **empleador directo de la empresa servicios (Agrotek)**...”; por misiva del 24/04/18 agregaron “...en dos oportunidades intimé a ambas empresas a fin de que aclaren mi situación laboral y me proveyeran de tareas...**desentendiéndose de la relación que nos vincula...**”.

A su vez, en el libelo inicial postularon “...*inicio acción por cobro de pesos en contra de la firma Agrotek Servicios SRL...y en forma solidaria contra la firma Refinería del Norte SA...*”; “...*Mi mandante ingresó a trabajar en relación de dependencia para la firma Agrotek...cumplió sus tareas en las instalaciones de la Refinería del Norte...*”; “...*Desde el comienzo hasta la finalización de la relación laboral las tareas desarrolladas por mi mandante consistían en realizar la limpieza de los pisos, baños, escritorios y mobiliario de Refinería del Norte, siguiendo las órdenes impartidas por Agrotek Servicios y Refinería del Norte...*”; “...*solicito se declare maliciosa y temeraria la conducta de los empleadores Agrotek y Refinería respecto de la relación laboral que los vinculó con mis mandantes...Condene a ambos en forma solidaria...*”.

Tampoco la contraria fue clara al momento de asentar su postura.

Mediante CD del 14/04/18 Agrotek comunicó a los actores “...*Ratifico que se ha tratado de una decisión unilateral de Refinería del Norte (Refinor). Siendo que en su TCL expresa que debe entenderse que Refinería del Norte debe ser considerado empleador directo por las características del caso, deberá requerir a dicha empresa la prestación de servicios...*”. Por CD de 04/04/18 Refinería manifestó “...*Oponemos formal defensa de falta de legitimación respecto del reclamo que ud. cursa a esta empresa toda vez que Refinería del Norte (Refinor) no es ni ha sido su empleadora...Rechazamos que Refinor sea o haya sido su empleador directo y/o que utilizara su prestación de servicios tal como lo pretende y/o que Refinor sea responsable solidaria y/o ilimitadamente de las obligaciones emergentes de la relación laboral que invoca... debiendo en todo caso dirigir usted sus reclamos a su empleador AgrotekServicios...*”.

Al mismo tiempo, cuando contestó demanda, Refinería negó haber sido empleador de los actores, reclamó falta de legitimación pasiva y sugirió que aquellos accionen en contra de la empresa que los contrató, Agrotek. Puntualizó que erraron al requerir la extensión de responsabilidad en los términos del art. 29 de la LCT pues no es una empresa de servicios eventuales ni utilizó una interpósita empresa para evadir sus responsabilidades. Dijo que su empresa tiene objetos sociales absolutamente distintos -y contradictorios- de los de la accionada, por lo que tuvo que encomendarle la realización de determinadas tareas o actividades que no hacen a su especialización.

2. Estimo pertinente señalar que un concepto adecuadamente descriptivo de “empleador” es el que prevé el derecho positivo argentino en el art. 26 de la LCT, en el sentido de que es la persona que da u otorga ‘trabajo’ -entendido como la oportunidad de trabajar- y que recibe la tarea que brinda el trabajador. A su vez, es quien dirige y organiza la empresa -organización de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos-, que puede estar constituida por una sola unidad técnica o de ejecución o por varias de ellas.

En este sentido, es quien dentro de su empresa posee derechos o poderes que lo erigen en su director, tales como el ‘poder de dirección’ -entendido como la facultad de impartir órdenes-, el ‘poder disciplinario’ -o facultad de sancionar a sus empleados incumplidores de sus normas u órdenes- y el ‘poder de control’, o de ejercer controles personales al trabajador, destinados a la protección de sus bienes.

En línea con esta conceptualización corresponde advertir que una de las variadas formas en que la relación laboral aparece en la realidad es la que se traduce en la pluralidad de empleadores que se vinculan con un trabajador (o con varios) mediante un contrato único. Aquella norma mencionó expresamente esta posibilidad al referirse al empleador como la persona física o conjunto de ellas, o jurídica -tenga o no personalidad jurídica propia- que requiera los servicios de un trabajador (LCT, art. 26)

Se debe distinguir esta situación de aquella en que el trabajador está vinculado a empleadores diversos por contratos también diferentes. Este caso, los empleadores pueden no tener una vinculación jurídica o económica entre sí, el factor que los vincula es que un mismo trabajador presta servicios diferenciados para cada uno de ellos, en un mismo período, pero en diferentes horarios o jornadas. Por ejemplo, el trabajador que durante la mañana trabaja para un empleador y durante la tarde lo hace para otro, en la misma o en distinta actividad. Se alude a esta situación con la expresión “pluriempleo”. Existe en nuestro derecho una modalidad contractual que permite esa pluralidad de contratos.

Por otro lado, es importante analizar la figura de extensión de responsabilidad invocada, la del art. 29 LCT, que regula sobre interposición y mediación: *“Los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social. Los*

*trabajadores contratados por empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente para desempeñarse en los términos de los artículos 99 de la presente y 77 a 80 de la Ley Nacional de Empleo, serán considerados en relación de dependencia, con carácter permanente continuo o discontinuo, con dichas empresas”.*

Si bien como regla cuando un empresario necesita trabajadores los contrata y asume el rol de empleador, en algunas ocasiones opta por reclutarlos sin asumir dicho papel recurriendo a los servicios de terceras personas que toman o tienen operarios dependientes y que los prestan para que laboren para quien se los solicite. Se trata de supuestos de “interposición” de personas, pues ese tercero prestador de trabajadores se interpone en la relación material y lógica que debe mediar entre el empresario que recibe el trabajo y el dependiente que lo aporta. Cuando se dan estos fenómenos, en lugar de haber dos sujetos del contrato de trabajo (trabajador y empleador), se visualizan tres: trabajador, empleador formal prestador de trabajadores (o sujeto interpuesto) y empresario que recibe el trabajo de aquel primero.

En estos casos ese tercero que se dedica no a producir bienes ni a prestar auténticos servicios sino a prestar trabajadores se entromete y se instala como empleador formal pero que no hace trabajar a sus dependientes en su fábrica, taller, comercio u oficina, sino que los contrata al solo efecto de prestárselos a otros empresarios que si los utilizarán en sus fábricas, talleres, comercios u oficinas, claro que sin querer figurar como empleadores.

3. Descriptas las plataformas fáctica y doctrinaria sobre las que se asientan los temas en discusión, es momento de examinar las constancias de la causa y la prueba rendida para establecer el rol que desempeñaron cada una de las firmas demandadas.

La prueba documental compuesta por recibos de haberes, certificados de trabajo y de servicios y remuneraciones revela que los actores dependieron laboralmente de Agrotek Servicios. Vale recalcar que dichos instrumentos están suscriptos y sellados a nombre de quien sería el socio gerente de la firma, Ezequiel Cacciamani.

La prueba testimonial arroja información relevante. En el cuadernillo de la parte actora, Leonardo Francisco Montenegro declaró que en Agrotek fue compañero de trabajo de los reclamantes, quienes cumplieron tareas de limpieza en Refinería del Norte. Explicó que inicialmente aquellos fueron contratados por Carlos Cacciamani y que luego de su fallecimiento se hizo cargo su hijo Ezequiel.

Sergio Daniel Roldan fue compañero de los actores en Refinor y aseveró que Agrotek les pagaba el sueldo. Expuso que aquellos prestaron servicios en la planta de la ciudad de Banda del Río Salí.

La parte codemandada impugnó la persona del deponente Sergio Roldan en razón de estar enfrentado en juicio con la empresa, lo que quita valor probatorio a su declaración por tener interés en el proceso y estar comprendido dentro de las generales de ley. También atacó sus dichos por cuanto pretendió que Refinería resulte empleador o responsable laboral solidario -lo que resulta falso- y respecto de que los actores se desempeñaron para aquella pero que era Agrotek quien le pagaba sus sueldos.

Rechazo esta tacha porque la existencia de juicio entre testigo y parte no constituye restricción alguna a su deposición testimonial, pues sólo se impone

analizarla con cautela y celo (Cámara del Trabajo en el caso “Aibar Daniel Arturo y otros vs. El Molino Gastronomía SRL s/ cobro de pesos”, sent. 22 del 24/02/2017) y porque se atacó al testigo sólo porque declaró en contra de sus intereses

Refinería ofreció un interrogatorio referido solamente a las condiciones laborales de la actora Claudia Castro. El testigo Raúl Oscar Ledesma afirmó que se desempeñó como técnico de seguridad patrimonial de Refinería del Norte, que aquella era una empleada de Agrotek y que trabajó para Refinor, aclarando que la primera era contratista de esta última. Expuso que Agrotek fue su empleadora y que su representante era Ezequiel Cacciamani.

Otro testigo, Ezequiel Molina, explicó que llevó a cabo el mantenimiento vehicular de Refinería del Norte y que no conoció a la actora. Admitió que Agrotek fue la empresa que brindó servicios de limpieza y mantenimiento de espacios verdes en Refinor. Aseveró que el responsable de la firma fue Ezequiel Cacciamani, aunque desconoció quién impartió indicaciones a los dependientes.

También fueron impugnados los sres. Ledesma y Molina porque su dependencia laboral con la demandada los llevó a declarar subjetivamente en su favor.

Corresponde rechazar la tacha formulada pues esta circunstancia no es suficiente para invalidar la exposición de los testigos, pero obliga a apreciar los testimonios con mayor prudencia y estrictez, pues se compromete, en alguna forma, la imparcialidad de los dichos, por lo que resulta fundamental su corroboración con otras probanzas idóneas (CSJT, sentencias n° 1045 de fecha 08/11/07 y n° 185 de fecha 26/03/12).

4. Puedo anticipar que no valoraré el relato del testigo Roldán pues no me convenció de que conoció efectivamente a los sres. Castro y Núñez. Ello por cuanto expresó que se desarrollaron en la ciudad de Banda del Río Salí, mientras que aquellos expresamente afirmaron haberlo hecho en la estación de servicios de avenida Mitre N° 858 de la ciudad de San Miguel de Tucumán y nunca mencionaron prestación de servicio alguna en aquella otra localidad a la que hizo referencia el testigo.

Las demás declaraciones -de los testigos de ambas partes litigantes- resultaron coincidentes en varios puntos determinantes para el proceso: Agrotek fue la empresa que brindó servicios de mantenimiento en la sucursal de ‘Refinor’ donde se desempeñaron los actores y la que abonó sus sueldos. Refinería contrató sus servicios pero no se encargó del manejo del personal, pues de eso se hizo cargo un individuo ajeno a su plantel, sr. Ezequiel Cacciamani, quien, a su vez, fue quien suscribió como socio gerente de Agrotek la documentación laboral aportada por los accionantes.

Por ello entiendo que quien tuvo a su disposición los poderes de dirección y organización empresarial, en los términos esbozados al comenzar el análisis de este acápite, fue aquel representante de la empresa codemandada Agrotek.

Estimo que la testimonial resultó por excelencia la prueba aclaratoria de los extremos en pugna por ser reveladora, de gran eficacia probatoria y enorme trascendencia convictiva por provenir de protagonistas directos de los hechos relatados, recalcando que los propios deponentes ofrecidos por la accionada abonaron parte de la tesis de los denunciante. Las exposiciones fueron fundadas, verosímiles - conforme las circunstancias del caso y las reglas de la sana crítica- e idóneas para resolver la cuestión. En este sentido, tiene dicho el Máximo Tribunal Local -en postura

que hago propia- que cuando un hecho controvertido se deba decidir solamente en base a las declaraciones de los testigos, las mismas deben ser “*categóricas, amplias, sinceras, con razón de los dichos y no deben dejar duda*” respecto de los hechos que relatan, en orden a tener por acreditados los extremos respecto de los que depusieron (conf. CSJT, “Sicard vs Cianci”, sent. 642 del 8/8/12; “Acuña vs Bristol”, sent. 495 del 8/7/2011).

El complejo probatorio testimonial y documental me habilita a concluir que Agrotek Servicios SRL fue el titular del contrato de trabajo como empleador de ambos denunciados.

Al mismo tiempo, no resulta admisible extenderle a Refinería del Norte SA la responsabilidad solidaria e ilimitada en los términos reclamados del art. 29 de la LCT, por cuanto no se acreditaron los supuestos allí previstos. Es que tal como se expuso con la reseña de las pruebas producidas quedó acreditado que la codemandada Refinor no habría ejercido ninguno de los poderes que lo podrían encuadrar como empleador de los actores.

Asimismo, enmarcar la relación que pudo existir entre ambas empresas demandadas dentro de otro de los tipos de solidaridad que prescribe el plexo normativo vigente -lo cual no fue reclamado- significaría excederme en mis facultades y atentar en contra del principio de legítima defensa de las demandadas. Así lo declaro.

**SEGUNDA CUESTIÓN: Extremos de la relación laboral: fecha de ingreso; tareas, categoría profesional, jornada y remuneración.**

Fecha de ingreso:

La prueba documental laboral aportada por los denunciados (recibos de haberes, certificados de trabajo y de servicios y remuneraciones suscriptos por el socio gerente de Agrotek e intervenidos por la autoridad competente) respaldan la fecha por ellos invocada. Por lo tanto, concluyo que ingresaron a trabajar bajo dependencia de esa empresa el 02/05/2000. Así lo declaro.

Tareas, categoría profesional:

Estimo que las pruebas testimonial y documental examinadas recientemente y la presunción a favor de los actores ante el silencio de la empleadora -que permite tener por cierta su versión (art. 60 CPL)- son suficientes para concluir que llevaron adelante tareas de limpieza en la estación de servicio ‘Refinor’ y que les correspondió la calificación de “maestranza A” del CCT 130/75. En efecto, el art. 5 de dicho cuerpo normativo describe que el personal de maestranza y servicios como aquel que realiza tareas atinentes al aseo del establecimiento, que se desempeña en funciones de orden primario y tareas varias sin afectación determinada, siendo a) el personal de limpieza y encerado, entre otros. Así lo declaro.

Jornada:

1. Expusieron los actores que trabajaron de lunes a viernes de 6 a 15 h y los sábados de 7 a 10 h.

2. Es oportuno recalcar que legalmente, la jornada completa se presume y que la extraordinaria debe ser acreditada con prueba fehaciente.

La ley de jornada de trabajo (LJT n° 11544) prescribe que su duración no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho semanales y considera dicho lapso como de “jornada completa” (art. 1).

También la LCT regula este tema. El art. 198 dispone que la reducción de la jornada máxima legal solamente procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo. De esta norma se colige que la “jornada normal de trabajo” es la regla y la “jornada reducida” la excepción y que, a su vez, esta reducción puede ser establecida por las disposiciones legales o acuerdos de partes.

Al mismo tiempo, el art. 196 establece que la extensión de la jornada de trabajo es uniforme para toda la nación y que se regirá por la LJT, con exclusión de toda disposición provincial en contrario.

De este modo, todas las jornadas de trabajo -cualquiera sea su tipo- poseen un límite legal pensado para no ser sobrepasado y por ello, el legislador ordena la retribución, con ciertos recargos, de la labor prestada por encima de tales topes. La posibilidad de trabajar por encima de los límites legales, en principio, sólo se podría admitir frente a una excepción legal o reglamentaria que liberaría en forma permanente esos topes (art. 1 inc. B de la Ley N° 11544).

3. Puedo concluir que los sres. Castro y Núñez se desarrollaron durante 43 horas semanales, superando los 2/3 de las normales de la actividad (art. 92 ter LCT), por lo que puedo considerarlos dependientes de jornada completa. Así lo declaro.

#### Remuneración:

Denunciaron que en marzo de 2018 cobraron \$24.448,60 y esa fue la suma que tomaron como base para la confección de su planilla liquidatoria.

#### **TERCERA CUESTIÓN: Despido y su justificación.**

1. No está discutida la versión de los actores respecto de que la vinculación se extinguió por despido indirecto comunicado mediante TCL en fecha 25/04/2018.

Puedo aseverar que todas las piezas postales intercambiadas por las partes en la etapa prejudicial son auténticas y fueron recibidas debidamente, conforme surge del informe del Correo oficial en CPA2 y de la presunción de autenticidad del art. 88 CPL.

Por sendas comunicaciones epistolares los sres. Castro y Núñez comunicaron a Agrotek: “...en dos oportunidades intimé a ambas empresas fin de que aclararan mi situación laboral y me proveyeran tareas, bajo a percibimiento de considerarme injuriado y despedido en forma indirecta (art. 242 ley 20.744), respondiéndome en ambas ocasiones con evasivas, desentendiéndose de la relación que nos vincula, por medio de la presente le comunico que hago efectivo dicho apercibimiento, y en consecuencia, me considero injuriado y despedido en forma indirecta...”. Se aprecia que se remitieron a unos TCL de fecha 12/04/2018 con el siguiente contenido: “...Habiendo iniciado mi relación laboral con uds. (Agrotek)...hace más de 17 años...son ustedes mi empleador directo y quien tiene la obligación de proveerme de trabajo efectivo, independientemente de que la firma Refinería del Norte SA me permita o no el ingreso a sus instalaciones. negamos que Refinería del Norte SA haya decidido unilateralmente negarme el ingreso a mi lugar de trabajo...Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta que **desde el día 26/03/2018 no se me permiten el ingreso a mi lugar habitual de trabajo...y ante la negativa de proveerme tareas habituales, sin razón alguna que lo justifique, los intimo para que en el perentorio e improrrogable plazo de 48 horas de recibida la presente aclaren mi situación**



***laboral, me provean tareas y me garantice ocupación efectiva, poniendo mi fuerza de trabajo a su disposición, bajo apercibimiento de considerarme injuriada y despedida por vuestra exclusiva culpa...***

Estas misivas fueron contestadas por Agrotek mediante CD de fecha 14/04/2018 en este sentido: “...*Ratifico que se ha tratado de una decisión unilateral de Refinería del Norte SA -Refinor-. Siendo que en su TCL expresa que debe entenderse que Refinería del Norte SA debe ser considerado empleador directo por las características del caso, deberá requerir a dicha empresa la prestación de servicios. Niego y rechazo que ud. se encuentre deficientemente registrada, siendo reales las condiciones laborales que surgen de los recibos de haberes...*”.

2. Es dable destacar que el art. 242 de la LCT dispone que una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación.

En este caso particular, adquiere especial relevancia el ‘deber de ocupación’ - expresamente previsto en el art. 78 de igual cuerpo normativo- entendido como una de las obligaciones más fuertes que la ley impone al empleador, quien debe otorgarlo de manera adecuada observando los deberes de buena fe y colaboración, de manera tal que el dependiente tenga libre posibilidad de prestar su obligación sin obstáculos (arts. 62 y 63 de la LCT). Como para la LCT el principal objeto del contrato de trabajo es la actividad productiva y creadora del hombre (art. 4) el empleador debe garantizarle ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o categoría profesional, salvo que motivos fundados lo impidan. Asimismo, la jurisprudencia sostuvo que el trabajador tiene la obligación, pero también el derecho de trabajar y que el empleador sólo puede liberarse de la carga de dar ocupación efectiva -aun cuando abone la remuneración- cuando existan motivos fundados que se lo impidan.

Estimo que por CD del 12/04/2018 Agrotek no solamente pretendió desentenderse de la situación perjudicial que atravesaban sus dependientes Castro y Núñez en la estación de servicios donde prestaban tareas, sino que además admitió que se encontraban sin tareas. Esta conducta contradice de manera absoluta el deber de buena fe que debió observar (art. 63 LCT) y el deber de ocupación (art. 78 LCT) y constituyó una injuria lo suficientemente grave para justificar la denuncia del contrato de trabajo dispuesta por aquellos. Así lo declaro.

#### **CUARTA CUESTIÓN: Procedencia de los rubros reclamados.**

De conformidad a lo establecido en el art. 214 inc. 6 del CPCC, corresponde tratar lo concerniente a los rubros y montos reclamados.

**Antigüedad, indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes de despido:** proceden estos rubros, atento al despido indirecto justificado (arts. 245, 246, 232 y 233 LCT).

**SAC s/ preaviso:** No encontrándose acreditado su pago, corresponde que prospere este rubro. Tal el criterio sostenido por la CSJT en “Pessoa Alfredo y otros vs. SADAIC s/cobros” (sent. 840 del 13/11/1998).

**SAC proporcional:** corresponde admitir la pretensión de este rubro por no estar acreditado su pago (art. 121-123 LCT).

**Vacaciones proporcionales 2018:** los actores tienen derecho a este rubro de conformidad con lo dispuesto por el art. 156 de la LCT.

**SAC s/ integración mes de despido:** procede este rubro de acuerdo con el criterio jurisprudencial sentado por la doctrina legal de la Corte Suprema de Tucumán en el fallo “Luna Gabriel vs Castillo SACIFIA” (sentencia 835 del 17/10/2013).

**Mes de marzo y días de abril de 2018:** proceden estos reclamos por no estar acreditado su pago.

**Art. 2 de la Ley n° 25323:** esta norma, en lo pertinente, dispone que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley n° 20744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6º y 7º de la Ley n° 25013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o de cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Para la procedencia de este incremento indemnizatorio es preciso que el trabajador curse una intimación fehaciente al empleador moroso, a los efectos de otorgarle una última oportunidad para que éste adecue su conducta a las disposiciones legales, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la norma analizada, vencido el plazo de cuatro días desde la extinción de la relación laboral (cfr. criterio sostenido por la CSJT, sent.1433 del 21/11/2016 en “Gómez Pablo Daniel vs. Tiburcio Sanz S.A.”). Asimismo, debe tenerse presente que la mora del empleador en el pago de las indemnizaciones se produce luego de transcurridos los cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo laboral, según se desprende del juego armónico de los arts. 128, 149 y 255 bis de la LCT. Así entonces, la intimación exigida por la norma para que proceda el incremento indemnizatorio establecido en el art. 2º de la Ley N° 25323, debe ser efectuada luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo, oportunidad en que recién el empleador se encuentra en mora.

Los actores emplazaron al empleador conforme lo dispuso la ley mediante TCL del 01/06/2018, por lo que son acreedores del reclamo.

**Art. 80 de la LCT:** es importante enfatizar que esta norma sufrió una importante modificación en el año 2000 -efectuado por la Ley N° 25345, publicada en el BO el 17/11/00-que introdujo un último apartado imponiendo una sanción al empleador que "no hiciere entrega" de las constancias o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero, dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que al efecto le efectuara el trabajador. Dicha sanción consiste en una indemnización a favor del trabajador, equivalente a tres veces la mejor remuneración, mensual, normal y habitual que hubiere percibido durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuere menor. A su vez, el Decreto N° 146/2001, reglamentó los arts. 43, 44 y 45 de la mencionada ley anti-evasión. Su art. 3º dispuso que *"El trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que hace alusión el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las constancias o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N°*

*20744 y sus modificatorias, dentro de los treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo".*

En efecto, la cuestión quedaría de la siguiente forma: resuelto el vínculo contractual, nace la obligación en cabeza del empleador de hacer entrega de los certificados. A tal fin contará con un plazo de 30 días corridos para dar cumplimiento a dicha obligación; si no lo hiciera, el trabajador quedará facultado a intimarlo para que en el plazo de dos días hábiles los entregue, en caso contrario, el empleador deberá abonar la indemnización a favor de aquél.

Esta intimación fue efectuada por la parte actora mediante TCL del 01/06/2018, por lo cual prospera este reclamo.

**BASE DE CÁLCULO:**

Los rubros declarados procedentes se calcularán sobre la base de la remuneración percibida de \$24.448,60. Así lo declaro.

**INTERESES:**

1. Los importes que progresan devengarán intereses desde que son debidos y hasta su efectivo pago (art.128 y 149 LCT). Para su cómputo se aplicará la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la causa "Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones (sentencia N° 1422 de fecha 23/12/15) donde ratifica su decisión de abandonar el criterio anterior de la aplicación de la tasa pasiva promedio del B.N.A. y más recientemente, en la causa "Bravo José Armando vs. Los Pumas S.R.L. s/ Indemnizaciones" (sentencia n° 686 de fecha 01/06/17) en la que sostuvo: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago".

Para así decidir el Máximo Tribunal Provincial tuvo en consideración que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (art. 14 CN) y su crédito reviste naturaleza alimentaria; además de ello tuvo en cuenta la función resarcitoria de los intereses moratorios y la profunda vinculación entre la tasa de interés y la depreciación monetaria en las circunstancias económicas actuales.

Asimismo, en este pronunciamiento destacó la función relevante de la casación como unificadora de la jurisprudencia aclarando que "El cambio de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales lejos está de configurar una solución "única", "universal" o "permanente" ya que el criterio propiciado "no resulta portador de una verdad absoluta y eterna, sino que por el contrario , conlleva la realización de un juicio histórico, basado en circunstancias económicas, sociales, sociológicas y jurídicas que se verifican en este momento, dejando a salvo que no es imposible, sino probable, que en otro momento a tenor de un cambio sustancial de las actuales circunstancias, esta Corte podrá revisar el criterio que hoy se establece en materia de intereses moratorios en los créditos laborales en ejercicio de la relevante función nomofiláctica que es privativa de la casación".

2. Ahora bien, es dable reconocer que en el presente caso se ha producido una notable vulneración de la integridad del crédito alimenticio del trabajador (principio de

intangibilidad retributiva, conf. arts. 14 bis de la Constitución Nacional, 120, 131, 137, 149, 208 y ccdtes. de la LCT) y, en consecuencia, de su derecho de propiedad (art. 14 CN), por lo que cabe determinar qué tasa de interés deberá aplicarse para mantener la intangibilidad de ese crédito, tal como lo estableció el precedente jurisprudencial antes mencionado.

En efecto, aplicando un promedio de la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días a todos los rubros declarados procedentes desde la fecha en que se produjo el distracto y hasta la actualidad (abril/2023), el incremento del crédito de los trabajadores ascendería a 250,76%, mientras que el índice de precios del consumidor (en adelante IPC) registró en igual período una variación del 836,81% y el salario mínimo vital y móvil (en adelante SMVM) una variación de 713%. O sea, tanto el IPC como el SMVM aumentaron más del doble que la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días, por lo que ineludiblemente la aplicación de la simple tasa activa resulta insuficiente y no equivaldría a un justo resarcimiento ante el proceso inflacionario actual. Por lo visto, se corrobora que, en este caso particular, existe una evidente y desproporcionada disminución del crédito laboral de los accionantes por efecto de la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la mora en el pago de sus créditos por la parte demandada.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por la CSJT y de la CSJN como Máximos Tribunales, en orden a que pudieren prevalecer criterios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica, y en función de lo previsto en el art. 768 del CCCN, a los efectos del cálculo de intereses de los montos de condena, se duplicará la tasa activa aplicable, sin perjuicio de la duplicación de la multa que se fijó precedentemente como sanción en virtud de lo establecido por el art. 275 de la LCT. En consecuencia, al momento del cálculo de intereses final se aplicará DOS VECES la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días a todos los rubros declarados procedentes. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que en caso de que en la etapa de cumplimiento de sentencia corresponda aplicar el art. 770 CCCN (anatocismo), se aplicará sobre el monto de condena actualizado solo una vez la tasa activa. Así lo declaro.

En este sentido, nuestro Máximo Tribunal Provincial tiene dicho que *“los magistrados deben quedar en libertad para estudiar y resolver en cada causa en las que intervengan, cuál es la tasa aplicable para dar una respuesta apropiada a la justicia del caso concreto y a la realidad económica, de la cual los jueces no deben encontrarse abstraídos. Es que la razonabilidad de los criterios judiciales en materia de tasa de interés judicial puede entrar en una crisis cuando se suprime al magistrado la facultad de aplicar las normas en forma flexible de modo de acercar la solución más justa al caso concreto...la discrecionalidad del Juez tiene mayor amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros en la determinación final de la misma y su adecuación a las circunstancias del caso...corresponde dejar librado a la prudente apreciación de los jueces de mérito de la causa la aplicación de una tasa que, conforme las circunstancias comprobadas del caso, cumpla la función de otorgar un razonable interés al capital de origen, reservándose esta Corte el control último de razonabilidad*

*en dicha apreciación...*” (cf. CSJT, “Olivares Roberto Domingo vs. Michavila Carlos Armando y otro s/ daños y perjuicios”, sent. N°937 del 23/09/2014; CAT, Sala 1, “Lazarte María Graciela del Valle vs Aegis Argentina SA s/cobro de pesos”, sent N°30 del 16/05/2022).

En igual dirección, comparto el criterio adoptado por el voto concurrente del Dr. Petracci en el considerando n° 20 del fallo “Massolo, Alberto Jorge c/ Transporte del Tejar S.A” dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 20/04/2010, en el que textualmente se dejó dicho: *“Que, sin perjuicio de lo expresado, no puede dejar de señalarse que tanto el Tribunal (conf. Fallos: 315:158, 992 y 1209) como la doctrina especializada han reconocido en la tasa de interés un remedio para dicha situación, lo que deberá ser también evaluado por los jueces de la causa como una alternativa para evitar que los efectos de la depreciación monetaria que tuvo lugar durante la crisis económica y financiera, incidan solamente sobre quien fue la víctima del daño, tema para el cual los magistrados deben ponderar los antecedentes del caso y las circunstancias económicas del momento para determinar con criterio prudencial el interés aplicable”*.

Asimismo, no debe perderse de vista que la consideración de la tasa activa como un piso mínimo para los créditos laborales, con posibilidad de aumentar la misma según la situación imperante al momento del dictado de la sentencia, ha sido receptada también desde la doctrina. Así Julio Armando Grisolia propone “establecer para los créditos laborales la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para préstamos. Esta tasa actuaría como la mínima que los jueces podrían aplicar, sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor. Podría tratarse de una modificación del art. 276 LCT o una nueva norma. La tasa activa del Banco de la Nación Argentina equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito” y también que: *“la tasa de interés aplicable estaría unificada en todo el país, dejando a salvo la discrecionalidad de los jueces para aplicar un porcentual mayor de considerarlo prudente. Es decir que la nueva norma que debería sancionarse actuaría como un piso mínimo y serviría de orden público laboral en la materia: sería una forma más de hacer previsible para todos los actores sociales el costo real del despido* (Grisolia Julio A. “La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales”, La Ley 05/5/2014, pág. 3) (cf. CAT, Sala 6, “González José Fernando vs Status SRL, sent. N°93 del 28/05/2019). (el subrayado me pertenece).

3. En síntesis, la tasa de interés se aplica concretamente para resguardar el contenido del crédito adeudado y con el único objeto de mantener la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias de cada caso (cf. CSJN, “Vieytes de Fernández-Suc- vs. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 295:973) (cf. CAT, Sala 6, “Jiménez Ricket Fimma Macarena vs Bustos Mercedes Eliana s/cobro de pesos, sent. N°150 del 20/10/2021) debiendo ser incrementada cuando el contexto socio

económico en el que se dicta sentencia impone la necesidad de evitar que el crédito del trabajador sufra los efectos de la depreciación monetaria.

Por último, cabe destacar que la decisión de incrementar la tasa activa en virtud de los parámetros previamente expuestos, se ha convertido en el criterio mayoritario en el fuero laboral local (cf. CAT, Sala 6, “González José Fernando vs Status SRL, sent. N°93 del 28/05/2019; Sala 1, “Lazarte María Graciela del Valle vs Aegis Argentina SA s/cobro de pesos”, sent N°30 del 16/05/2022; Sala 6, “Jiménez Ricket Fimma Macarena vs Bustos Mercedes Eliana s/cobro de pesos, sent. N°150 del 20/10/2021; entre otros). Así lo declaro.

**PLANILLA DE CONDENA**

Ingreso 02/05/00  
Egreso 25/04/18  
Antigüedad 17 años, 11 meses y 23 días

Categoría: maestranza A conforme CCT 130/75

MRNyH 24.448,60  
Total \$ 24.448,60

<u>1) Indemnización por antigüedad</u>		
\$ 24.448,60x 18 años		\$ 440.074,80
<u>2) Indemnización sustitutiva del preaviso</u>		
\$ 24.448,60x 2 meses		\$ 48.897,20
<u>3) Integración mes de despido</u>		
\$ 24.448,60/ 30 x 5 días		\$ 4.074,77
<u>4) SAC s/ Preaviso</u>		
\$ 48.897,20/12		\$ 4.074,77
<u>5) SAC s/ Integración mes de despido</u>		
\$ 4.074,77/12		\$ 339,56
<u>6) Haberes mes de despido</u>		
\$ 24.448,60/ 30 x 25 días		\$ 20.373,83
<u>7) Vacaciones proporcionales 2018</u>		
\$ 24.448,60/ 25 x (28*115/360)		\$ 8.747,17
<u>8) SAC 1° 2018</u>		
\$ 24.448,60/ 2 x 115/180		\$ 7.809,97
<u>9) Haberes mes de marzo 2018</u>		
\$ 24.448,60		\$ 24.448,60
<u>10) Art. 2 Ley 25.323</u>		
(\$440.074,80+\$48.897,20+\$4.074,77)x50%		<u>\$246.523,38</u>
Total Rubros 1) al 10) \$ al 02/05/2018		\$ 805.364,05
Interés tasa activa BNA desde 02/05/2018 al 05/04/2023	504,46%	<u>\$ 4.062.739,48</u>
incrementada dos veces (252,23%x2)		
Total Rubros 1) al 10) \$ al 05/04/2023		<b>\$ 4.868.103,53</b>
<u>11) Art. 80 LCT</u>		
\$ 24.448,60x 3		\$73.345,80

<u>Interés tasa activa BNA desde 06/06/2018 al 05/04/2023</u>	498,58%	<u>\$ 365.687,49</u>
incrementada dos veces (249,29%x2)		
Total Rubros 11) \$ al 05/04/2023		<b>\$ 439.033,29</b>

<u>Resumen condena</u>	<u>CLAUDIA PATRICIA CASTRO</u>	
Total Rubros 1) al 10) \$ al 05/04/2023		\$ 4.868.103,53
Total Rubros 11) \$ al 05/04/2023		<u>\$ 439.033,29</u>
<b>Total General \$ al 05/04/2023</b>		<b>\$ 5.307.136,82</b>

**JUAN CARLOS  
NÚÑEZ**

Ingreso	02/05/00
Egreso	25/04/18
Antigüedad	17 años, 11 meses y 23 días

<u>Categoría:</u>	maestranza A	conforme CCT 130/75
-------------------	--------------	---------------------

<u>MRNyH</u>	<u>24.448,60</u>
Total	<b>\$ 24.448,60</b>

<u>1) Indemnización por antigüedad</u>		
\$ 24.448,60x 18 años		\$ 440.074,80
<u>2) Indemnización sustitutiva del preaviso</u>		
\$ 24.448,60x 2 meses		\$ 48.897,20
<u>3) Integración mes de despido</u>		
\$ 24.448,60/ 30 x 5 días		\$ 4.074,77
<u>4) SAC s/ Preaviso</u>		
\$ 48.897,20/12		\$ 4.074,77
<u>5) SAC s/ Integración mes de despido</u>		
\$ 4.074,77/12		\$ 339,56
<u>6) Haberes mes de despido</u>		
\$ 24.448,60/ 30 x 25 días		\$ 20.373,83
<u>7) Vacaciones proporcionales 2018</u>		
\$ 24.448,60/ 25 x (28*115/360)		\$ 8.747,17
<u>8) SAC 1° 2018</u>		
\$ 24.448,60/ 2 x 115/180		\$ 7.809,97
<u>9) Haberes mes de marzo 2018</u>		
\$ 24.448,60		\$ 24.448,60
<u>10) Art. 2 Ley 25.323</u>		
(\$440.074,80+\$48.897,20+\$4.074,77)x50%		<u>\$246.523,38</u>
Total Rubros 1) al 10) \$ al 02/05/2018		\$ 805.364,05
Interés tasa activa BNA desde 02/05/2018 al 05/04/2023	504,46%	<u>\$ 4.062.739,48</u>
incrementada dos veces (252,23%x2)		

Total Rubros 1) al 10) \$ al 05/04/2023 \$ 4.868.103,53

11) Art. 80 LCT

\$ 24.448,60x 3 \$73.345,80

Interés tasa activa BNA desde 06/06/2018 al 05/04/2023 498,58% \$ 365.687,49

incrementada dos veces (249,29%x2)

Total Rubros 11) \$ al 05/04/2023 \$ 439.033,29

<u>Resumen condena</u>	<u>JUAN CARLOS NÚÑEZ</u>	
Total Rubros 1) al 10) \$ al 05/04/2023		\$ 4.868.103,53
Total Rubros 11) \$ al 05/04/2023		<u>\$ 439.033,29</u>
<b>Total General \$ al 05/04/2023</b>		<b>\$ 5.307.136,82</b>

<u>Resumen condena</u>		
<b>CLAUDIA PATRICIA CASTRO</b>		<b>\$ 5.307.136,82</b>
<u><b>JUAN CARLOS NÚÑEZ</b></u>		<u><b>\$ 5.307.136,82</b></u>
<b>Total General \$ al 05/04/2023</b>		<b>\$ 10.614.273,64</b>

**COSTAS:**

En virtud del progreso de la acción, de la admisión de todos los rubros reclamados y del rechazo de la extensión de responsabilidad a Refinería del Norte SA, estimo justo que Agrotek soporte las costas de la actora y que ésta asuma las de Refinería (art. 63 CPCC de aplicación supletoria, art. 14 CPL). Así lo declaro.

**HONORARIOS:**

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la acción, es de aplicación el art. 50 inc. 1 de la ley citada, por lo que se toma como base regulatoria el monto del capital de condena actualizado, el que según planilla precedente resulta al 05/04/2023 la suma de \$10.614.273,64.

Habiéndose determinado la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor profesional desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido y lo dispuesto por los arts. 15, 39, 42 y concordantes de la Ley 5480, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley n° 24432, ratificada por la ley provincial N° 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Por los actores se apersonaron los Dres. Enrique Martín Cacici y César Marcelo Cisneros como apoderados. Fue el Dr. Cacici quien interpuso demanda, mientras el letrado Cisneros ofreció pruebas, asistió a audiencia conciliación y, en la etapa de pruebas, a las testimoniales de CPA2 y CPD4 ya la confesional CPD2. Presentó alegatos.

a) Dr. Cacici: valoro apropiado regularle el 13% con más el 55% de la base regulatoria, por su actuación en el doble carácter durante una etapa del proceso, lo que arroja la suma de **\$712.925,38**.

b) Dr. Cisneros: es justo regularle el 15% con más el 55% de la base regulatoria, por su actuación en el doble carácter a lo largo de dos etapas del proceso, lo que arroja la suma de **\$1.645.212,41**.

2) Por Refinería del Norte SA se presentó el Dr. Pablo Bulacio Paz, como apoderado. Asistió a audiencia conciliación, a las testimoniales de CPA2 y CPD4 y a la confesional de CPD2. Presentó alegatos.



Le corresponde el 15% con más el 55% por su actuación en el doble carácter a lo largo de todo el proceso, o sea, **\$2.467.818,62**.

Por lo expuesto,

**RESUELVO:**

**I. ADMITIR LA DEMANDA** promovida por los sres. CLAUDIA PATRICIA CASTRO, DNI 24.200.010, domiciliada en av. Martín Berho 917 de esta ciudad y JUAN CARLOS NÚÑEZ, DNI 21.597.495, con domicilio en Gregorio de Jesús Díaz n° 30 Barrio Cruz Alta, Colombres, Cruz Alta, Tucumán en contra de AGROTEK SERVICIOS SRL, CUIT 30-71138101-1, ubicado en av. Aconquija 2553, Yerba Buena. En consecuencia, se la condena al pago total de \$10.614.273,64 (pesos diez millones seiscientos catorce mil doscientos setenta y tres con 44/10), correspondiéndoles a cada uno de los actores la suma de \$5.307.136,82 (pesos cinco millones trescientos siete mil ciento treinta y seis con 82/100) en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, SAC/preaviso, SAC proporcional, Sac/integración mes de despido, vacaciones proporcionales 2018, mes de mayo días de abril de 2018, art. 2 de la Ley n° 25323 y art. 80 LCT, conforme lo tratado

**II. RECHAZAR LA EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD** a REFINERÍA DEL NORTE SA, CUIT 30-65823369-2, ubicada en av. Mitre 858 de esta ciudad, según lo valorado.

**III. COSTAS:** como se consideraron.

**IV. REGULAR HONORARIOS:** 1) Dr. Enrique Martín Cacici: \$712.925,38. 2) Dr. César Marcelo Cisneros: \$1.645.212,41. 3) Dr. Pablo Bulacio Paz: \$2.467.818,62, según lo analizado.

**V. PLANILLA FISCAL:** Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13 de la Ley n° 6204).

**VI. COMUNICAR** a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán.

**REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER.**REL

LEONARDO ANDRES TOSCANO  
Juez  
Juzgado del Trabajo de VIª Nominación